

Renovar la Concertación

La fuerza de nuestras ideas

Armando Arancibia, Soledad Alvear, Eduardo Aninat, José Pablo Arellano, Pilar Armanet, Genaro Arriagada, Mariana Aylwin, Víctor Barrueto, Edgardo Boeninger, José Joaquín Brunner, Vicente Caruz, Carlos Catalán, Guillermo Ceroni, Marcos Colodro, Aldo Cornejo, Enrique Correa, Antonio Cortés Terzi, Cristián Cox, Francisco Cumplido, Ernesto Edwards, Alberto Etchegaray, Javier Etcheberry, Daniel Fernández, Angel Flisfisch, Alejandro Foxley, Alvaro García, Oscar Guillermo Garretón, María Isabel González, Fernán Ibañez, José Miguel Insulza, Francisco Huenchumilla, Claudio Huepe, Juan Carlos Latorre, Iván Lavados, Zarko Luksic, Jorge Marshall, Carlos Massad, Sergio Molina, René Morales, Luis Ortiz Quiroga, Máximo Pacheco Matte, Sergio Pérez, Augusto Parra, Jorge Pizarro, Víctor Manuel Rebolledo, Jorge Rodríguez Grossi, Jorge Rosenblut, Marcelo Schilling, María Teresa Ruiz, María Antonieta Saa, Andrés Sanfuentes, Jorge Schaulsohn, Enrique Silva Cimma, Eugenio Tironi, Jaime Tohá, José Antonio Viera Gallo, Hernán Vodanovic, Ignacio Walker, Marta Woerner.

La Concertación ha liderado la democratización y modernización del país durante casi una década, presidiendo su gobierno en una de las etapas más promisorias de su historia. Hoy, sin embargo, se halla en una encrucijada. O actualiza su ideario para entrar al próximo siglo, o corre el riesgo como fuerza capaz de gobernar una sociedad en pleno desarrollo como la nuestra. O renueva los acuerdos que hicieron posible su existencia o podría verse anulada en una estéril confrontación interna de poder. O construye un proyecto para profundizar la sólida obra desarrollada por sus dos gobiernos o terminará desconociéndola y dándole la espalda perdiendo su credibilidad ante la ciudadanía.

Chile ha recuperado la libertad, la dignidad y la democracia

Vivimos en libertad. El pueblo elige a sus autoridades, tanto en el ámbito central como en el local. Se terminó con el miedo que ahogaba la iniciativa de las personas. Se acabaron las policías secretas, se terminó con la práctica sistemática de la tortura, se puso fin al exilio y se ha facilitado la reinserción de los retornados. Se terminó también con las prohibiciones ideológicas y la propaganda oficial. El Estado ha hecho un esfuerzo por investigar y dar a conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. La acción terrorista ha sido controlada. Las FF.AA. vuelven a sus funciones profesionales. La sociedad chilena ha dejado de estar dividida aunque la reconciliación en la memoria y en los corazones está lejos aún de completarse y Chile todavía no está en paz con su pasado. Todos pueden expresar sus opiniones, sus creencias, sus preferencias de valor y estilos de vida, a pesar de las intolerancias que subsisten y de las resistencias que aún encuentra la plena expresión de la diversidad y del pluralismo. En Chile impera el Estado de derecho. La transición que ha encabezado la Concertación ha sido exitosa, más allá de sus inevitables limitaciones e imperfecciones (...) Sin duda, queremos y necesitamos más democracia, pero es robusteciendo y ampliando la que tenemos que podremos lograrlo, y no por la vía de erosionar la confianza que la gente ha ido depositando en ella.

La Concertación ha conducido la década de mayor crecimiento económico en la historia de Chile

Durante la presente década nuestra economía ha crecido ininterrumpidamente a una tasa promedio anual superior al ocho por ciento, tres veces más que durante el periodo de 1952 a 1970, y más del doble de la tasa promedio durante el régimen militar (...) Por su parte, la inflación ha caído desde niveles del 30 por ciento, a

finis de los años 80 a alrededor de cinco por ciento. La economía ha estado generando en promedio, cien mil nuevos empleos anualmente. Adicionalmente, Chile muestra un superávit fiscal durante más de ocho años consecutivos.

El crecimiento económico ha ido de la mano de una mayor equidad social

El crecimiento económico ha creado condiciones favorables para una mayor igualdad. En los últimos diez años, 2,2 millones personas mejoraron el nivel de ingresos de sus hogares, superando el umbral de la pobreza, al mismo tiempo que la indigencia se redujo a la tercera parte. El quintil de hogares pobres incrementó su participación en el ingreso de manera significativa, disminuyendo la brecha entre el 20 por ciento de hogares más ricos y el 20 por ciento de hogares más pobres. Asimismo, han mejorado las remuneraciones, se ha incrementado la participación de los pobres y las mujeres en la fuerza laboral, los salarios mínimo y del sector público han aumentado en términos reales, la inversión en educación prácticamente se duplicó entre 1990 y 1997 y la enseñanza básica municipalizada ha mejorado respecto de 1988.

Chile, en definitiva, está progresando, no está estancado (...) Se están transformando, simultáneamente, las bases de nuestra educación, del sistema judicial y la infraestructura física y de comunicaciones. Si antes de centrar la atención en los atrasos, debilidades y en los nuevos problemas que surgen con el desarrollo, la Concertación no asume como propio el progreso social que ella misma ha impulsado en la década reciente, estará echando por la borda su principal activo.

Es evidente que nuestro desarrollo es aún insuficiente y que hay múltiples problemas que Chile debe superar sin postergación.

A pesar de los positivos logros obtenidos durante los últimos ocho años, aún hay más de tres millones de personas que viven en condiciones de pobreza, el 25 por ciento de las cuales se halla en indigencia. Los pueblos indígenas, pese a la nueva ley, sufren aún una postergación intolerable. Las remuneraciones promedio en el mercado laboral son bajas y las brechas entre diferentes grupos de ingreso, aún demasiado grandes. Todavía la inequidad es un rasgo central de nuestra convivencia, especialmente en cuanto a las oportunidades educacionales, la atención de salud, el acceso a la justicia y la calidad de vida.

Todo lo anterior es incuestionable y constituye un desafío que obliga a redoblar los esfuerzos (...) Pero tenemos la oportunidad real de entrar en la lista de los países desarrollados en los próximos años y, con ello, disponer de una mejor calidad de vida para todos. Hoy día el peligro mayor consiste en perder el impulso y así desperdiciar esta oportunidad. Ya le ocurrió a Chile en otro momento de su historia. Si el núcleo de dirección de la sociedad olvida el sentido de su misión, vacila, pierde de vista las prioridades, abandona la confianza en sí mismo o se fragmenta, entonces ese riesgo podría transformarse en una amenaza real.

En Chile se respira un aire de libertad, esfuerzo e innovación que invita a la esperanza, no a la frustración

Chile avanza sólidamente por el camino de la democracia y el desarrollo (...) Los dos gobiernos de la Concertación han gozado de un amplio respaldo popular y han cumplido en lo esencial con su misión y metas programáticas. Constituye una paradoja, en consecuencia, que desde el interior de la alianza a veces no sepamos reconocer la enorme obra realizada y, por el contrario, se transmita una imagen de frustración, de enervamiento con el proceso seguido por la transición democrática y de inocultable malestar ante los nuevos desafíos que plantea la profundización de nuestro desarrollo. Esto confunde a una ciudadanía que trabaja

duramente para salir adelante y refuerza las posiciones más nostálgicas y conservadoras (sean de derecha o de izquierda) y deja sin una orientación de futuro a las generaciones jóvenes que necesitan liderazgos imbuidos de convicción y no de desaliento.

Los problemas del Chile de hoy son los propios de una sociedad en fuerte proceso de desarrollo

Digamos las cosas como son. Chile no es una sociedad del bienestar respecto de la cual sólo cabe la satisfacción y la complacencia, pero no es tampoco una sociedad del malestar, respecto de la cual sólo caben la lamentación y la frustración. Chile es ni más ni menos que un país en fuerte proceso de desarrollo. Se halla plagado, por lo mismo, de las contradicciones propias de una intensa modernización. La principal de esas contradicciones es la brecha existente entre las expectativas de la gente, en rápido y constante aumento, y la desigualdad y más lenta satisfacción de tales aspiraciones. Sin embargo, ningún país ha logrado cerrar esa brecha sin antes haber alcanzado el estadio de una economía de altos ingresos.

Adicionalmente, existen en la sociedad múltiples problemas que nacen de la rápida incorporación a la modernidad y que generan una variedad de efectos subjetivos, tales como sentimientos de inseguridad laboral, temor frente a la delincuencia urbana, desconcierto ante las incertidumbres que trae consigo la velocidad del cambio, reclamo de protección de los propios derechos y dignidad, preocupación por la protección del equilibrio ecológico, angustia por la pérdida del sentido de comunidad y por el debilitamiento de la confianza en la estabilidad de las relaciones humanas más próximas. Porque Chile ha avanzado, hoy se plantean desafíos nuevos que llaman a la innovación y a la auto-exigencia, no al pesimismo ni a la autocomplacencia.

Chile enfrenta hoy desafíos que no estaban presentes cuando se fundó la Concertación hace más de diez años.

Hemos ingresado a una civilización globalmente organizada en torno a los principios democráticos, la universalización de los mercados, la innovación tecnológica y la comunicación electrónica. Sólo las naciones que logren crecer sostenidamente, incorporarse a los flujos internacionales de comercio, comunicación y tecnologías, adaptarse al cambio permanente, combinar la competencia con la cooperación y la solidaridad, y mantener su cohesión social y capacidad asociativa, podrán ser exitosas en el largo plazo.

En muchos aspectos de la globalización nuestro país recién comienza a recorrer el camino hacia el siglo XXI. Es inescapable completar lo más rápido posible, las tareas centrales del crecimiento económico y desarrollar las capacidades nacionales básicas requeridas para integrarse al mundo sin perder, desde luego, nuestra identidad cultural básica como una comunidad nacional única y diferenciada. Este es el desafío central que debe plantearse la Concertación si quiere mantener la fuerza que le permitió en su momento derrotar a la dictadura, conducir la transición, promover el crecimiento y la equidad, abrir el país al mundo y dar un gobierno estable a Chile por dos periodos consecutivos.

Chile debe sostener con firmeza su actual modelo de desarrollo para crecer durante los próximos diez años al menos al mismo ritmo de la década de los 90

Somos partidarios sin vacilaciones de una moderna economía de mercado con sentido social y respetuosa de los equilibrios ecológicos (...) Postulamos una economía basada en la iniciativa de las personas como emprendedores, que fomente y aproveche el libre comercio internacional, no sujeta a restricciones administrativas innecesarias ni al peso de aparatos burocráticos que cobren y gasten sin medida. Una economía en que la producción esté en manos del sector privado, sujeto a las regulaciones que corresponda.

Donde el crecimiento se base en una sana política fiscal, el estímulo a la inversión y el ahorro, las ganancias de productividad y un constante mejoramiento de la competitividad país por vía de la educación y la capacitación, el uso de tecnologías, la generación de conocimientos aplicables a la producción, y el incremento constante de la confianza y de la capacidad de cooperación entre grupos e individuos. Donde los trabajadores tengan voz y capacidad de negociar y colaborar dentro de la empresa, donde sus derechos laborales sean protegidos por la legislación, su inserción en el mercado ocupacional y su movilidad se vean facilitadas por una normativa flexible y protectora, un permanente reentrenamiento y asociaciones sindicales modernas. Una economía donde impere un sistema tributario justo, simple y efectivo, que permita al Estado cumplir con sus obligaciones (...) Donde los mercados sean transparentes y competitivos, se hallen sujetos a normas que protejan a los usuarios y consumidores y la autoridad posea las herramientas necesarias para evitar las concentraciones monopólicas y las distorsiones que perjudican a la gente.

Cualquier desviación respecto de los elementos matrices de nuestro esquema de desarrollo tendría un alto costo para el país. Rompería la continuidad laboriosamente lograda en la conducción de la economía y abriría las compuertas para experimentos populistas tantas veces fracasados en otras latitudes, nacidos de la impaciencia más que del rigor.

Ni el crecimiento económico estable y sostenido ni la equidad social podrían lograrse sin un papel activo, pero limitado, del Estado.

Estamos conscientes de que en Chile, dentro de la actual etapa de su desarrollo, cabe a los gobierno poner particular énfasis en sus funciones de cohesión e integración sociales incluyendo la seguridad ciudadana. Entendemos que la primera obligación de cualquier gobierno en Chile es administrar con eficiencia los recursos de que ya dispone. Asimismo, corresponde al gobierno asegurar una perspectiva de largo plazo para el desarrollo del país. Las naciones no existen sin una visión estratégica de sí mismas, pues ellas son mucho más que una aglomeración de individuos que interactúan en los mercados. Entre las condiciones básicas de esa perspectiva de futuro se cuentan en nuestro caso la educación y la capacitación, la defensa nacional, la inversión en infraestructura, el fomento a la ciencia y la tecnología, y de manera muy especial, la protección del medio ambiente y de nuestros recursos naturales.

Para tener un Estado moderno hay que delegar funciones de gestión a la sociedad civil y emprender una radical descentralización de sus estructuras.

Se requiere un Estado de gran fortaleza para cumplir las tareas que le incumben. Para ello es preciso avanzar en su modernización y tecnificación, renovar la carrera funcionaria y, sobre todo, abrirse a nuevas formas de gestión de los servicios públicos en estrecha colaboración con la sociedad civil y el sector privado. Lo que se necesita es ir definitivamente hacia una gestión descentralizada de aquellos servicios que presta el Estado, incorporando de variadas maneras a las familias, los vecindarios, las comunidades locales, los organismos sin fines de lucro, las organizaciones no gubernamentales, los empresarios y las personas. En eso consiste, a nuestro parecer un Estado moderno, en delegar y entregar funciones de gestión, sin temor a experimentar, a innovar y a dejar que la gente se vuelva emprendedora también en estos ámbitos tradicionalmente reservados a los empleados fiscales. No podemos, no debemos seguir insistiendo en que la oposición principal en esta materia se presenta entre “estatistas” y “privatistas”. Lo que importa es prestar un servicio de calidad, seguro y sin discriminaciones a todos los ciudadanos independientemente de quien lo provea.

Para dar un salto en la modernización del país se requiere también dar un salto en la desconcentración y descentralización del Estado. Esto implica acentuar la regionalización de Chile y fortalecer progresivamente los municipios llamados a ser los protagonistas de la vida democrática comunitaria.

Para ser eficaz el Estado debe focalizarse en sus tareas esenciales

Lo fundamental es asegurar que el Estado cumpla eficazmente sus mandatos esenciales: manejar las relaciones externas y asegurar la defensa de la soberanía nacional; garantizar la libertad y seguridad de sus ciudadanos; posibilitar el acceso de la población a la justicia y asegurar la protección de sus derechos; proveer de un nivel digno de atención en salud y educación de calidad y cumplir con el compromiso de que ningún chileno o chilena permanezca en condiciones indigencia y pobreza al finalizar la próxima década. El Estado debe ser un impulsor decidido y eficaz de soluciones que el mercado por sí sólo es incapaz de generar.

Si se quiere que el Estado sea eficaz en sus tareas más esenciales, debemos tener la lucidez de impulsar, simultáneamente, la transferencia a los privados de aquellas otras labores —de carácter productivo— que hoy realiza el Estado, pero en las cuales no presenta ventajas. Nada justifica que ellas se conserven en manos públicas o que no exista una apertura hacia la colaboración con el sector privado. Por el contrario, la experiencia muestra que las empresas públicas, una vez privatizadas, a condición de que se evite la conformación de poderes monopólicos y se asegure la competencia mediante adecuadas regulaciones, suelen modernizarse más rápidamente, extender y mejorar sus servicios, reducir costos para el consumidor o beneficiario, generar mayor empleo y, vía tributación, transformarse en importante fuente de recursos para el Estado. Es preciso, entonces, continuar avanzando por el camino que se ha seguido en materia de telecomunicaciones, energía, caminos, sanitarias, puertos y aeropuertos, así como en la modernización de las empresas del petróleo y del cobre.

Es necesario profundizar la democracia política y ampliar la participación en todas las esferas de la sociedad.

Chile debe seguir avanzando hacia una plena democratización y una mayor flexibilidad de su sistema institucional. Hay que superar las resistencias de la derecha, que se niega a abandonar sus amarras con el pasado autoritario. Esto implica concretamente, entre otras cosas, terminar con la institución de los senadores designados y vitalicios, eliminar el Consejo de Seguridad Nacional, modificar las atribuciones y composición del Tribunal Constitucional e introducir mayores grados de proporcionalidad al actual sistema electoral.

El hecho, sin embargo, es que sin completar un acuerdo constitucional y político de alcance nacional, tal situación permanecerá inalterada. Más aún, lo probable es que nada se obtenga por el camino de la confrontación, opción rechazada por la gran mayoría de los chilenos que valora fuertemente la estabilidad. La modernización de la sociedad exige ampliar la legitimidad del sistema político. La derecha debe escuchar esa necesidad para abrir paso a los cambios necesarios y la Concertación debe emplear toda su capacidad de movilización y persuasión para alcanzar este objetivo. Paralelamente, nuestros esfuerzos tienen que dirigirse a consolidar la democracia en la sociedad, reconociendo que hoy son muchas y más variadas las formas de participación.

Se precisa el desarrollo de una cultura de valores y libertades que exprese el pluralismo de la sociedad.

Partidarios como somos de un Estado y de una política seculares, de la diversidad de formas de vida y del pluralismo de los valores, afirmamos también el derecho inviolable a la existencia de las creencias, de los

credos y las iglesias: la libertad en el ejercicio de los cultos y su reconocimiento en condiciones de igualdad. La presencia de una esfera sagrada es propia de todas las sociedades. El cristianismo está presente en nuestra historia y en el Chile de hoy. Hay en él valores que han contribuido poderosamente a abrir paso a la noción de que las personas son inviolables y dignas en su esencial igualdad. En cambio rechazamos cualquier integrismo o fundamentalismo, porque a la postre sólo conducen a anular a las personas y a dividir a las sociedades.

En este contexto, la Concertación se aleja por igual del integrismo conservador y del relativismo radical. Somos parte de una corriente cultural que, aunque pluralista en sus concepciones de mundo, está sólidamente cimentada en diversas vertientes del humanismo que valoran en común la libertad y los derechos humanos y repudian tanto su aplastamiento autoritario como su ejercicio sin contenidos de valor. Que tolera las diferencias dentro de la sociedad y no acepta que nadie sea perseguido por la forma en que elige vivir, supuesto que no daña a terceros o contravenga el marco de la ley. Que cree firmemente en la igualdad esencial de las personas, independientemente de su raza, religión o sexo. Que por eso aspira también a una plena igualdad de derechos para la mujer así como la creación de apoyos y mecanismos institucionales que permitan materializar esa igualdad progresivamente en los diversos ámbitos de la sociedad. Que busca fortalecer la lealtad y permanencia de los vínculos comunitarios, pero entiende que la movilidad propia de las sociedades modernas —geográfica, de trabajo, de posiciones sociales, de estilos y oportunidades— introduce cambios profundos en esos vínculos primarios. Que asume como un deber la protección y el fortalecimiento del núcleo familiar, más allá de la forma cómo se halle integrado, a la vez que rechaza por artificiosa una legislación que no se haga cargo de regular las rupturas matrimoniales. Que demanda una posición firme frente a la violencia delictiva y sus causas, lo que supone combinar la acción personal y la comunitaria, la prevención, la sanción y la rehabilitación, y un sistema judicial a la vez más exigente consigo mismo y en la aplicación oportuna de la ley.

La Concertación debe renovarse para ofrecer un liderazgo a la altura del siglo XXI.

Estamos convencidos de que Chile vive uno de los periodos más interesantes y lleno de posibilidades de su historia. Hoy es otro país, no el país del pasado. La gran novedad de Chile no es el crecimiento económico en sí, ni su recuperada democracia política. La novedad está en la sociedad que se ha vuelto mucho más autónoma y dinámica, en la gente que emprende nuevas actividades: está en un país que se ha abierto al mundo en todos los ámbitos, está en las capacidades propias que hemos logrado desarrollar en todos los niveles.

El surgimiento de una sociedad dispuesta a cambiar es el hecho central del periodo que estamos viviendo a fines de este siglo. No estar dispuesto a reconocer este proceso fundamental, no ser capaces de interpretarlo y de darle conducción y, lo que es peor, darle la espalda para poner los ojos en un Chile que ya no existe más, está en la base de la crisis de representación que experimenta la política. Y es la causa también de la confusión que se ha generado dentro de la Concertación.

Santiago, 15 de mayo de 1998.

Fuente: El Mercurio, domingo 17 de mayo de 1998, páginas d14, d15 y d16.